

Análisis de Fondo

La paradoja del sur de Honduras: riqueza geoestratégica y deuda social en Choluteca y Valle

Escrito por Kevin Isidro

18/11/2025

I. Introducción

La región sur del litoral pacífico de Honduras, conformada por los departamentos de Choluteca y Valle, constituye uno de los espacios más estratégicos del país, tanto por su valor ecosistémico como por su peso geopolítico. Situada en un punto de confluencia con El Salvador y Nicaragua, y con salida directa al océano Pacífico a través del Golfo de Fonseca, esta zona forma parte de una plataforma natural de integración regional. Sin embargo, su relevancia geoespacial contrasta con los bajos niveles de desarrollo humano y los altos índices de desigualdad, exclusión y conflictividad que caracterizan la vida cotidiana de sus comunidades.

Además, el sur es uno de los territorios más vulnerables del país al cambio climático. Como parte del llamado Corredor Seco Centroamericano, enfrenta sequías prolongadas, pérdida de cultivos y fenómenos climáticos que se agravan debido a la débil capacidad institucional del Estado para garantizar derechos básicos y promover una gestión sostenible del territorio.

¿Por qué, a pesar de su posición geoestratégica y su alto potencial productivo y ecológico, la región Sur de Honduras continúa atrapada en un modelo de desarrollo que no mejora las condiciones materiales de sus comunidades, e incluso amenaza sus ecosistemas?

Este documento se fundamenta en la sistematización del análisis de coyuntura regional realizado en Choluteca el pasado 29 de agosto, con la participación de líderes comunitarios, de los municipios de Amapala, San Lorenzo, Caridad, Choluteca, Namasigüe, Concepción de María, Orocuina, El Triunfo y Marcovia. En este espacio, se identificaron los principales conflictos socioterritoriales, las dinámicas de participación, desafíos existentes, así como los ecosistemas y las estructuras estratégicas del territorio.

Enfoque y marco conceptual

Este análisis se fundamenta en la ecología política, disciplina que entiende los problemas ambientales como procesos profundamente ligados a relaciones de poder, disputas por recursos y modelos de desarrollo que los sustentan. Desde esta perspectiva, conceptos clave como territorio, territorialidad y conflicto socioterritorial son esenciales para entender las dinámicas en el sur de Honduras.

· **Territorio y territorialidad**

El territorio no es un espacio neutro ni un mero soporte físico; es una construcción social e histórica, moldeada por relaciones de poder, prácticas culturales, identidades y proyectos políticos. Como indica Escobar (2010), es un “campo de relaciones de poder” donde se disputan significados, usos y formas de apropiación de la naturaleza. Porto-Gonçalves (2001) lo define como un espacio vivido y apropiado por distintos actores. Raffestin (1980) sostiene que el territorio *“es el espacio transformado por el poder; no existe sin las relaciones sociales que lo producen”*.

En América Latina, Svampa (2019) destaca que el territorio también funciona como un espacio de resistencia y afirmación política, donde comunidades y pueblos despliegan estrategias frente a la expansión del capital.

La territorialidad se refiere a las relaciones materiales y simbólicas mediante las cuales los actores construyen, significan, defienden y transforman el territorio, reflejando diferentes formas de habitarlo y gestionarlo.

· **Bienes comunes y racionalidades en disputa**

Los bienes comunes como el agua, tierra, minerales del subsuelo, manglares, bosques y playas, son elementos naturales que sostienen la vida colectiva y que históricamente han sido gestionados de manera comunitaria (Ostrom, 1990; Gudynas, 2011).

La mercantilización de estos bienes, transformándolos en mercancías, sometidas a la lógica del mercado, genera tensiones profundas, especialmente en el sur de Honduras.

Esta disputa refleja un choque entre dos racionalidades: una económico-instrumental, que busca la acumulación de capital, y otra ecológica-comunitaria, centrada en la reproducción de la vida y la sostenibilidad de los ecosistemas (Leff, 2004).

· **Conflictos socioambientales y tensiones territoriales**

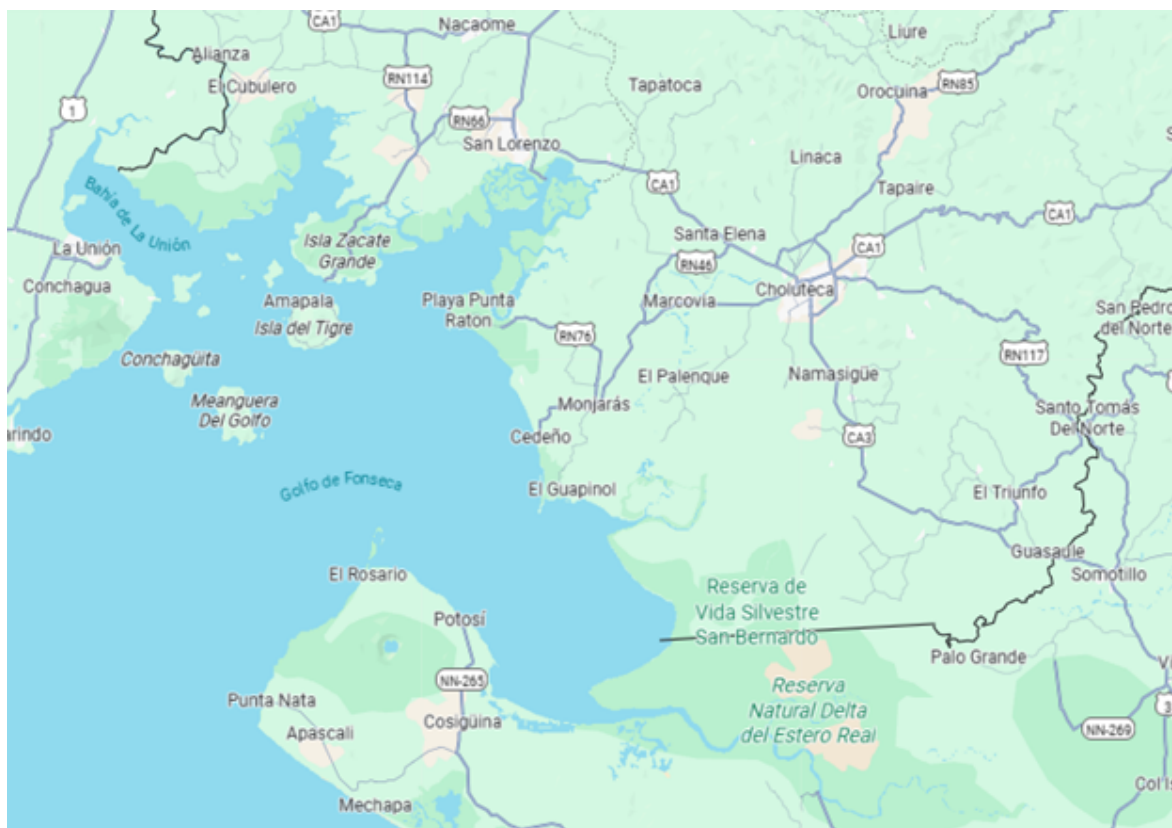
Siguiendo a González de Molina, Soto y Garrido (2015), el conflicto es *“permanente, estructural y consustancial al funcionamiento y evolución de las sociedades”*, que puede convertirse en un motor de transformación social, al cuestionar los modelos dominantes y abrir la posibilidad de nuevas formas de relación con la naturaleza.

Folchi (2001) señala que los conflictos ambientales son aquellos que se producen cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat. Estos conflictos, agrega, no sólo se explican por el daño ambiental percibido, sino por antagonismos entre actores con intereses contrapuestos sobre el territorio y sus recursos.

Finalmente, Quintero, González y Henao (2017) agregan que para que exista un conflicto ambiental no basta con que se produzca un daño ecológico: es necesario que exista conciencia del daño y disposición a defender el ambiente afectado. En América Latina, estas luchas son parte del “ecologismo popular”, que busca justicia ambiental, redistribución y reconocimiento cultural (Martínez Alier).

II. Configuración territorial

a) Posición geoestratégica y riqueza ecológica

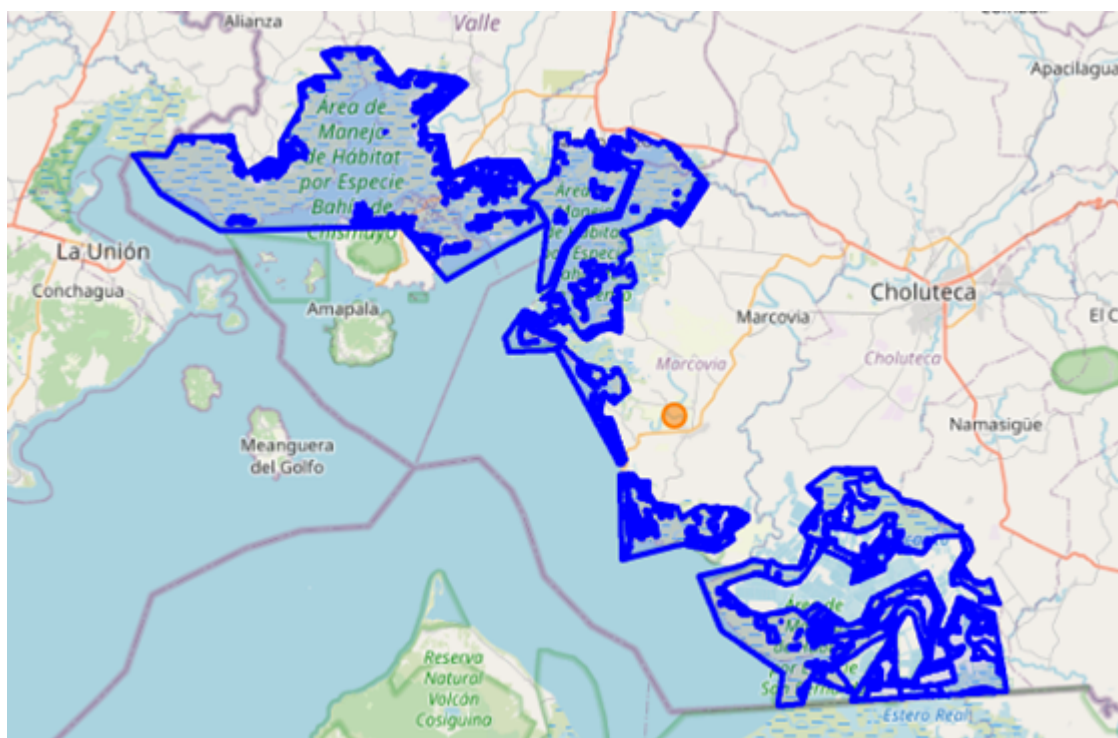


(Google, 2025)

La Región Forestal del Pacífico cuenta con 11 áreas protegidas que, en conjunto, abarcan una superficie de 101,683.48 hectáreas. Estas áreas están respaldadas legalmente por el Decreto 5-99-E, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de enero del 2000. Entre ellas destacan el Refugio de Vida Silvestre Bahía de San Lorenzo[1], el Refugio de Vida Silvestre Los Delgaditos, la Reserva de Uso Múltiple Estero Real o San Bernardo, y la zona de Manejo Especial de los Humedales de Cedeño.

Esta región alberga 75,031 hectáreas de manglares y humedales, reconocidos internacionalmente como Sitio Ramsar por su alta relevancia ecológica y climática. Este ecosistema es uno de los más importantes del país, ya que sirve como hábitat para al menos 81 especies de aves acuáticas, como el chorlito pico negro

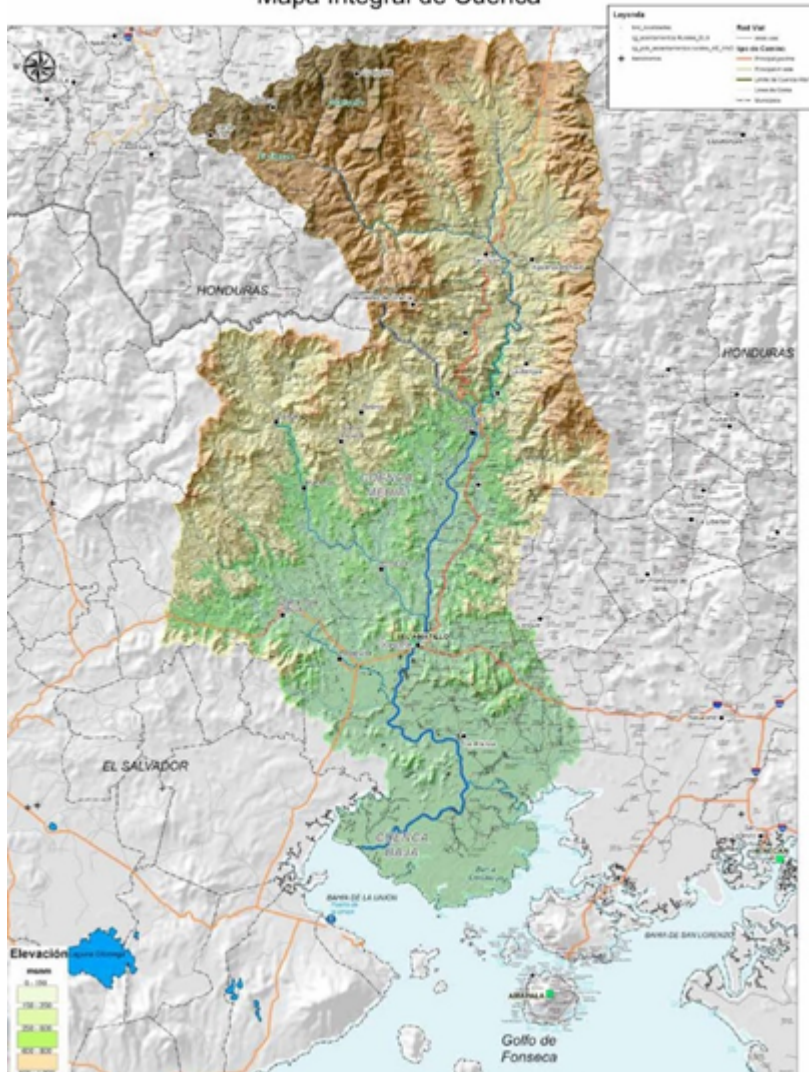
(*Charadrius wilsonia*) y el rayador (*Rynchops niger*). Además, actúa como refugio para especies en peligro crítico, como la tortuga de carey (*Eretmochelys imbricata*) y la tortuga golfina (*Lepidochelys kempii*). También alberga especies vulnerables, como el cocodrilo americano (*Crocodylus acutus*), la tortuga marina (*Lepidochelys olivacea*) y el curumo (*Avicennia bicolor*), un manglar característico de la región. (Secretaría de la Convención Ramsar, 2021).



Complementando su riqueza natural, la cuenca del río Goascorán, compartida entre Honduras y El Salvador, nace en el departamento de La Paz y desemboca en el Golfo de Fonseca. Con una extensión superior a los 2,345 km² en territorio hondureño, esta cuenca constituye un eje hídrico vital para el abastecimiento de agua, la agricultura de subsistencia y la biodiversidad acuática. (Comité Binacional de la Cuenca del Río Goascorán, 2018).

CUENCA RIO GOASCORAN

Mapa Integral de Cuenca



Su carácter binacional ha fortalecido la cooperación transfronteriza en gestión del agua, adaptación al cambio climático y conservación, aunque enfrenta fuertes amenazas como la deforestación, el uso intensivo del suelo y la contaminación.

La riqueza natural del sur también se destaca por su importante potencial geotérmico. En el departamento de Choluteca, especialmente en los municipios de Namasigüe y El Triunfo, se han identificado manifestaciones geotérmicas de temperatura moderada. Investigaciones como [Geochemical Exploration in Southern Honduras](#) han revelado la presencia de aguas termales que superan los 60 °C, lo que indica la existencia de reservorios geotérmicos para la generación eléctrica. Además, el proyecto [Yacimientos II](#), impulsado por el Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) en colaboración con la Secretaría Nacional de Energía (SEN), ha avanzado en la caracterización geológica, geohidrológica y social de diversos sitios piloto en el sur del país.

Por otro lado, la región también presenta condiciones excepcionales condiciones para la generación de energía solar. Los departamentos de Choluteca y Valle cuentan con extensas planicies, altos niveles de radiación solar durante la mayor parte del año y baja cobertura nubosa, lo que convierte al territorio en uno de los más idóneos del país para el desarrollo de parques fotovoltaicos.

Estas características han favorecido la instalación de múltiples proyectos solares a gran escala, posicionando a la región como la zona con mayor concentración de plantas fotovoltaicas de Honduras.

Tabla 1. Proyectos solares a gran escala en los departamentos de Choluteca y Valle

Proyecto	Depto.	Munici pio	Capaci dad
Agua Fría	Valle	Nacao me	60 MW
Valle Solar PV (COHESSA)	Valle	Nacao me	70 MWp
Pacific Solar I	Valle	Nacao me	25.9 MWp
Pacific Solar II	Valle	Nacao me	25.9 MWp
Del Sur (First Solar)	Valle	Nacao me	25 MW
El Pacífico (EM-Power)	Valle	Nacao me	50 MW
Pavana Solar Park	Valle	San Lorenzo	24 MW
Los Prados	Cholut eca	Namasi güe	35 MWp
Marcovia Solar	Cholut eca	Marcovi a	42.39 MWp (≈35 MWac)
Aura II	Cholut eca	Cholute ca	61.48 MWp
Choluteca I	Cholut eca	Cholute ca	23.3 MW
Choluteca II	Cholut eca	Cholute ca	35.1 MW

Llanos del Sur	Choluteca	Choluteca	14.8 MWp
-----------------------	-----------	-----------	-----------------

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del *Análisis de Coyuntura Regional*, realizado en Choluteca, el 29 de agosto de 2025.

Por otro lado, aunque Choluteca no lidera la lista nacional de territorios mineros, ocupa el cuarto lugar en superficie concesionada, con menos de 1 000 hectáreas en explotación en 2019, pero con un potencial significativo de expansión. La suma de concesiones en exploración, solicitudes y suspensiones supera las 3,000 hectáreas, lo que anticipa un aumento en las actividades extractivas en los próximos años.



(Oxfam, 2019).

El departamento de Valle, por su parte, ocupa el duodécimo lugar a nivel nacional en superficie concesionada, con aproximadamente 250 hectáreas registradas, aunque con perspectiva de crecimiento debido al número de solicitudes de exploración en trámite. (Oxfam, 2019).

La gráfica demuestra cómo Choluteca y Valle, aunque separados en la estadística, pero cercanos en el territorio, concentran una parte importante del interés extractivo en el país. Aunque las explotaciones actuales son moderadas, el incremento en solicitudes y concesiones evidencia una tendencia a expandir la frontera minera en el sur.

Sin embargo, esta riqueza contrasta con la realidad estructural de la región, ya que ambos departamentos forman parte del Corredor Seco Centroamericano, una

de las zonas más vulnerables del mundo frente al cambio climático (FAO & CEPAL, 2021; PMA, 2020).

b) *Impacto en la conectividad económica y política*

Desde 1838, con la construcción del puerto de Amapala, el sur de Honduras ha sido un eje fundamental para el desarrollo de la infraestructura y las estrategias para la conectividad regional. Este puerto facilitó dinámicas comerciales y extractivas, consolidando un modelo primario-exportador basado en la extracción de recursos naturales y la exportación agrícola.

Los enclaves mineros y agrícolas, ligados al circuito portuario de Amapala, transformaron profundamente el uso del suelo, concentraron grandes extensiones de tierra en pocas manos y consolidaron la presencia del capital extranjero en la región.

La disputa fronteriza entre Honduras y El Salvador, resuelta en 1992 por la [Corte Internacional de Justicia \(CIJ\) de 1992](#), estableció un régimen tripartito de uso compartido del Golfo de Fonseca, que desde entonces ha sido incluido en agendas regionales promovidas por el SICA y el BCIE. Estas iniciativas consideran al golfo como un nodo estratégico para proyectos logísticos, corredores interoceánicos y estrategias de adaptación al cambio climático.

El peso geopolítico de Choluteca y Valle en la actualidad, también se refleja en su infraestructura vial. La Carretera Panamericana, principal arteria de transporte en Centroamérica, atraviesa ambos departamentos y conecta Honduras con El Salvador y Nicaragua, facilitando el tránsito de personas y mercancías. Por esta vía circula cerca del 70% del comercio intrarregional centroamericano, lo que la convierte en un eje estructurante para la integración económica del istmo[2].

Por sus pasos fronterizos, El Amatillo (con El Salvador) y El Guasaule y La Fraternidad–El Espino (con Nicaragua), circula un volumen significativo de bienes, como más de 500 camiones diarios en El Guasaule, que transportan productos agroindustriales, combustibles y bienes manufacturados (La Prensa, 2019). Por el Amatillo, transita aproximadamente el 20 % del comercio terrestre de Honduras con el Triángulo Norte (CEPAL, 2021). Este entramado convierte a la región en un corredor clave para la articulación del país con el Mercado Común Centroamericano y las cadenas regionales de valor.

La infraestructura portuaria del Pacífico también refuerza esta conectividad. Destaca el Puerto de Henecán, en San Lorenzo, que moviliza cerca del 16 % del comercio exterior hondureño, principalmente con mercados del Pacífico, y constituye la principal salida marítima del país hacia esa cuenca (BCH, 2023).

En el ámbito nacional, la creación del Centro Asociado del Sur (CAS) representa una práctica innovadora en la gestión institucional de los departamentos de Choluteca y Valle. Este centro traslada parte de las competencias del Instituto de la Propiedad (IP) a una instancia regional, en colaboración con la Cámara de

Comercio e Industrias del Sur (CCISur). Su principal objetivo facilitar los trámites de registro mercantil e inmobiliario, promoviendo la formalización empresarial y el acceso a servicios registrales, sin que las personas tengan que desplazarse hasta Tegucigalpa.

Según el Instituto de la Propiedad (2021), esta descentralización busca fortalecer la competitividad del sur como una zona estratégica para la inversión y la logística regional. No obstante, esta nueva estructura institucional debe entenderse también en el contexto de reconfiguración territorial, impulsado por el auge de los proyectos de infraestructura y conectividad en el Golfo de Fonseca. Esto plantea interrogantes sobre la participación ciudadana, la gobernanza territorial y la distribución equitativa de los beneficios, en un escenario de creciente presión económica sobre los bienes comunes.

En la actualidad, la atención sobre los departamentos de Choluteca y Valle se refuerza por la reactivación del proyecto del ferrocarril interoceánico, que conectará el Golfo de Fonseca en el Pacífico con Puerto Castilla, en el Atlántico. Con una inversión estimada entre 10,000 y 20,000 millones de dólares y un plazo de construcción de 10 a 15 años, este proyecto ha sido presentado a países como EE.UU., Japón, China, Qatar y España, consolidando al sur hondureño como un eje logístico clave para el comercio global.

A nivel regional, en el eje económico y logístico, destacan iniciativas como el [Plan Maestro Trinacional de Inversión y Desarrollo del Golfo de Fonseca](#), impulsado por el BCIE con participación de Honduras, El Salvador y Nicaragua, y el [Proyecto Logístico Integral Golfo de Fonseca, que incluye la construcción del puente vehicular Coyolito–Amapala](#).

Además, se suman proyectos como el [Corredor Seco Vial](#), la [modernización del Puerto de Henecán](#) y el Programa de Carreteras Resilientes, todos orientados a fortalecer la conectividad mediante corredores interoceánicos y a consolidar un polo de crecimiento basado en el comercio, la energía y la infraestructura.

En cuanto a aspectos ambientales y climáticos, Choluteca y Valle concentran la mayor parte de los esfuerzos de adaptación y resiliencia del Corredor Seco Centroamericano (CSC), financiados por el Banco Mundial, la FAO, el PMA, y la Cooperación Española (AECID).

Iniciativas como [la Alianza para el Corredor Seco, el Corredor del Mangle y el Programa de Crecimiento Sostenible y Azul del Golfo de Fonseca](#) buscan fortalecer la seguridad alimentaria, la gestión hídrica y la restauración de ecosistemas costeros, articulando la conservación ambiental con la economía azul.

Además de la infraestructura comercial, la región del sur mantiene una presencia militar significativa que refuerza su papel estratégico en la defensa territorial, el control fronterizo y la proyección marítima. En San Lorenzo (Valle) opera el Décimo Primer Batallón de Infantería, mientras que en Choluteca están la 101

Brigada de Infantería y el 4.º Batallón de Artillería, unidades encargadas de la vigilancia terrestre y la seguridad fronteriza.

En el ámbito marítimo, la Base Naval de Amapala, ubicada en la Isla del Tigre, constituye un punto clave para el patrullaje y el control de las aguas del Golfo de Fonseca. Esta base se complementa con puestos avanzados de la Fuerza Naval de Honduras, como el apostadero militar en la Isla Conejo, clave en la proyección de soberanía en un espacio marítimo en disputa con El Salvador, y destacamentos reportados en zonas como Cedeño, que fortalecen la capacidad operativa del Estado en el litoral.

Tabla 2. Infraestructura militar y de defensa en la región sur de Honduras

Nombre / Unidad	Tipo	Ubicación
Décimo Primer Batallón de Infantería (XI BI).	Batallón terrestre	San Lorenzo, Valle.
Base Naval de Amapala.	Base naval	Isla del Tigre, Valle.
Primer Regimiento de Caballería Blindada (RECABLIN).	Regimiento blindado	Región Sur (Valle) – Ubicación específica no confirmada públicamente.
101 Brigada de Infantería – 4to Batallón de Artillería.	Brigada / batallón terrestre	Choluteca
Puesto avanzado de patrullaje naval (FNH).	Destacamento	Playas de Isla del Tigre (Playa Grande, Playa Negra)
Posta Naval en Cedeño.	Destacamento terrestre	Cedeño, Choluteca
Apostadero Naval de la Isla Conejo.	Puesto Naval	Amapala

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del *Análisis de Coyuntura Regional, Choluteca, 29 de agosto de 2024.*

La estructura de conectividad, defensa y sus proyecciones a futuro posicionan al sur de Honduras como una plataforma estratégica para corredores interoceánicos, puertos profundos y ferrocarriles de carga. Esto otorga a la región una nueva dimensión en su conectividad económica y política, aunque estos avances también plantean desafíos de gobernanza, impacto ambiental y participación social.

c) Indicadores de desarrollo: desigualdad estructural frente al potencial geoestratégico

El contraste entre el enorme potencial geoestratégico del sur hondureño y las precarias condiciones de vida de su población revela una profunda deuda histórica

del Estado con los departamentos de Choluteca y Valle. A pesar de su ubicación privilegiada, la región enfrenta graves déficits sociales, económicos y ambientales que limitan sus posibilidades de desarrollo sostenible.

Uno de los indicadores más ilustrativos de esta brecha es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Mientras que el promedio nacional es de 0,634, en Valle se registra un IDH de 0.629 (UNAH,2022) y en Choluteca de 0.613 (UNAH, 2022).

Además, según la FAO (2021), más de 1.4 millones de personas en Honduras enfrentan crisis alimentarias recurrentes vinculadas a la variabilidad climática, siendo Choluteca y Valle dos de los departamentos más afectados.

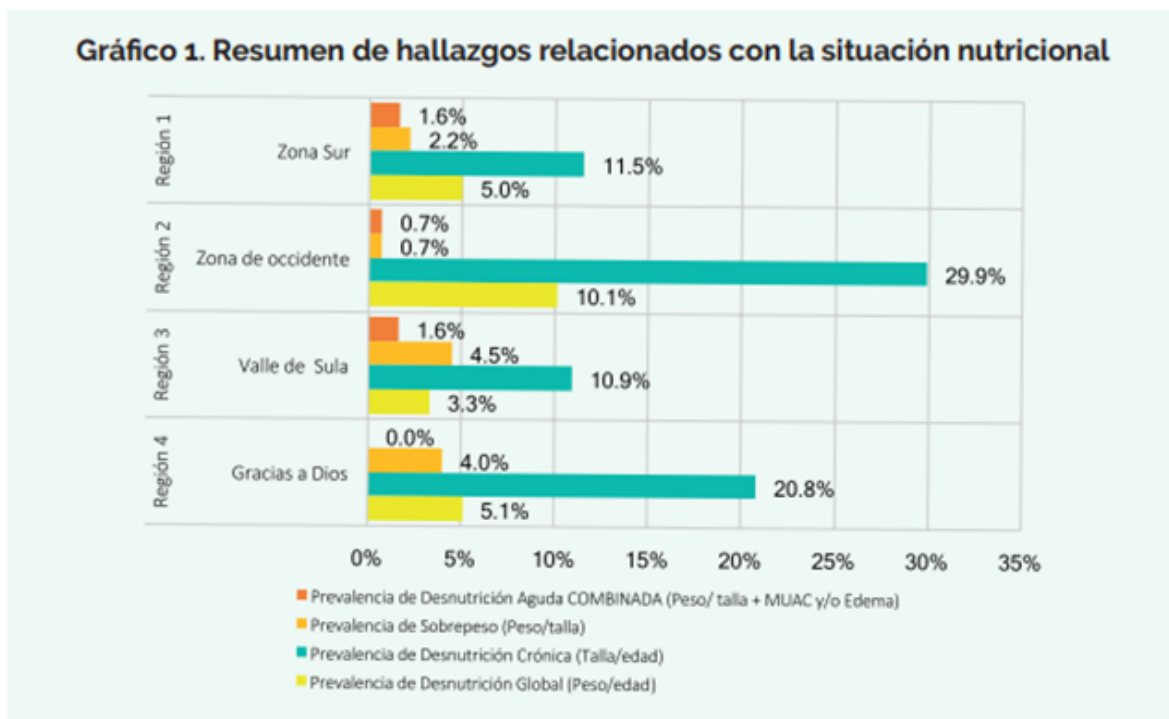
El acceso a servicios básicos también refleja estas desigualdades. Aunque el promedio nacional de cobertura eléctrica es de **88,25 %**, los departamentos del sur presentan contrastes significativos. **Choluteca**, con **83,64 %**, se mantiene por debajo del promedio nacional, mientras que **Valle**, con **89,47 %**, lo supera ligeramente. Sin embargo, esta diferencia marginal no se traduce en un acceso equitativo a los servicios energéticos, ya que la cobertura en espacios esenciales sigue siendo limitada. En los **centros educativos**, el acceso apenas alcanza **72,91 % en Choluteca y 72 % en Valle**, mientras que en los **centros de salud** los niveles de acceso son de **91,39 % y 84,72 %**, respectivamente. Estas cifras evidencian que, incluso con avances puntuales, persisten brechas estructurales en la infraestructura básica que restringen el desarrollo humano y productivo de una región.

Paralelamente, los niveles de **pobreza multidimensional** continúan siendo alarmantes: según el INE (2023), el 73.7 % de los hogares de Choluteca y el 65.4 % de Valle viven en condición de pobreza o pobreza extrema. Estas cifras superan el promedio nacional de 62.2 %, y es una precariedad que se asocia a los bajos niveles educativos, con promedios de 6.8 años de escolaridad en Choluteca y 7.1 en Valle. También a los altos índices de trabajo infantil y abandono escolar en las zonas rurales (UNAH/OEE, 2022; INE, 2023).

A esto se suma la presión ambiental sobre los ecosistemas del sur. En Choluteca, la cobertura boscosa se ha reducido a menos del 20 % de su superficie territorial (Global Forest Watch, 2024). En Valle, aunque conservaba cerca del 39 % de bosque natural en 2020, perdió un 7.8 % de su cobertura arbórea entre 2001 y 2024, equivalentes a cerca de 4.84 mil ha. Esto indica una tendencia de vulnerabilidad creciente (Global Forest Watch, 2025).

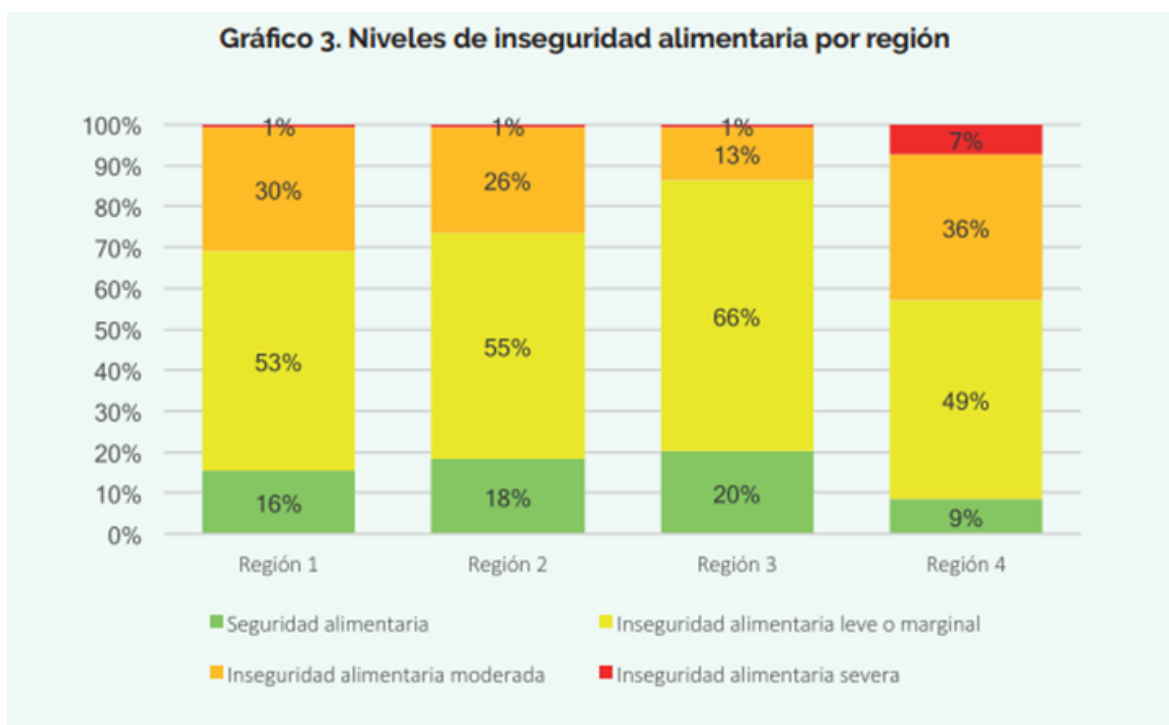
Por otro lado, la Encuesta de Nutrición y Seguridad Alimentaria 2022 del INE, UNICEF y PMA muestran que la Región 1, que corresponde a la Zona Sur, incluyendo Choluteca y Valle, enfrenta una situación alimentaria frágil que, aunque no alcanza los niveles extremos de otras regiones, revela vulnerabilidades profundas vinculadas al contexto climático y socioeconómico del territorio. En términos nutricionales, la región presenta una prevalencia de desnutrición global del 2,2 % y desnutrición aguda del 1,6 %, cifras moderadas en comparación con

otras zonas del país, pero acompañadas por un preocupante 11,5 % de desnutrición crónica, reflejo de carencias sostenidas que afectan el desarrollo infantil.



Encuesta de Nutrición y Seguridad Alimentaria 2022 del INE, UNICEF y PMA

Este patrón se relaciona estrechamente con la situación de inseguridad alimentaria: aunque un 16 % de los hogares de la Zona Sur logra mantener seguridad alimentaria, un 53 % experimenta inseguridad alimentaria leve o marginal, y un 30 % vive en inseguridad alimentaria moderada, lo que implica restricciones recurrentes en la calidad y cantidad de alimentos. Aunque la inseguridad alimentaria severa es relativamente baja (1 %), la combinación de alta inseguridad alimentaria moderada y niveles sostenidos de desnutrición crónica indica que la región permanece atrapada en un ciclo de vulnerabilidad estructural, asociado a la sequía, la degradación ambiental y la limitada capacidad institucional para garantizar acceso estable a alimentos nutritivos.



Encuesta de Nutrición y Seguridad Alimentaria 2022 del INE, UNICEF y PMA

La paradoja es clara: un territorio con recursos estratégicos, potencial geotérmico, tierras agrícolas, buena conectividad regional y salida marítima que sigue siendo uno de los más rezagados del país.

d) Tensiones y conflictos en torno a los bienes comunes

El sur de Honduras se ha convertido en un territorio de alta conflictividad socioambiental, donde la disputa por los bienes comunes, tierra, agua, playas, bosques e islas, refleja el choque entre proyectos económicos de gran escala y las formas comunitarias de subsistencia y organización. La expansión de la agroindustria, los proyectos energéticos y la apropiación de zonas costeras y forestales avanzan sobre territorios históricamente habitados por comunidades campesinas y pesqueras, generando procesos de despojo, degradación ambiental y fragmentación social.

Estas tensiones no son hechos aislados, sino sintonías de una crisis estructural en la gestión del territorio, marcada por la ausencia del Estado, la cooptación institucional y la concentración de los recursos naturales en manos de actores privados. Este modelo de desarrollo extractivo concentra poder y despoja a las comunidades de sus medios de vida.

Por ejemplo, en la comunidad de “El Tulito” (Marcovia, Choluteca), las comunidades denuncian presiones y amenazas de desalojo derivadas de la

expansión de la agroindustria azucarera, señalando a la Azucarera La Grecia como uno de los actores vinculados al acaparamiento de tierras. En El Tular (San Lorenzo, Valle), el conflicto se centra en la recuperación de tierras amparadas en títulos de la Reforma Agraria, con las comunidades reclamando la restitución y saneamiento jurídico de sus parcelas frente a ocupaciones privadas y la falta de respuesta institucional. En la Reserva Forestal La Botija (San Marcos de Colón, Choluteca), se registra un proceso sostenido de deforestación impulsado por la expansión agrícola y ganadera, la tala ilegal y una débil capacidad de control estatal, lo que amenaza la conservación de uno de los ecosistemas de montaña más importantes del sur del país.

Estos conflictos agrarios se vinculan estrechamente con tensiones hídricas que agravan la vulnerabilidad ambiental y social en la región sur. Líderes de los Comités de Defensa de la Naturaleza advierten que, en la cuenca del río Choluteca, especialmente en los municipios de Namasigüe y Choluteca, los sistemas de riego vinculados a la agroindustria reducen los caudales disponibles para las comunidades locales.

Paralelamente, en el departamento de Valle, pobladores de Caridad y Alianza han levantado alertas ante los planes de embalsamiento de la cuenca del río Goascorán, en la zona alta de Aguanqueterique, lo que podría generar conflictos por el acceso al agua para uso doméstico y agrícola, con el riesgo de que este conflicto adquiera carácter binacional. Además, la extracción de arena y piedra en ríos como el Nacaome, Choluteca, Goascorán y Sampile ha sido denunciada reiteradamente por organizaciones locales ante las autoridades municipales, sin que hasta ahora se haya obtenido una respuesta efectiva.

A la presión sobre los recursos hídricos se suman las tensiones en la franja costera, donde la privatización de playas públicas, como Playa Blanca y Playa Los Hornos en Amapala, restringe el acceso tradicional de las comunidades pesqueras al mar. Según líderes de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y de la Mesa Nacional de Pescadores Artesanales, la industria camaronera continúa destruyendo amplias zonas de manglar en el municipio de San Lorenzo, ecosistemas esenciales para la biodiversidad y la protección costera. A ello se suma el aumento del nivel del mar, que afecta especialmente a Cedeño (Marcovia, Choluteca), donde amenaza con la desaparición de asentamientos humanos y la pérdida de medios de vida en sectores como Cedeño Centro, Playa Los Delgaditos y Playa El Edén.

Finalmente, según la Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias Extractivas del Sur (PCAIESUR), las amenazas derivadas del avance de las concesiones mineras metálicas persisten en la región. En El Triunfo, a pesar de una declaratoria municipal que prohíbe la actividad minera, la explotación continúa de forma irregular, evidenciando la falta de control y la aplicación efectiva de las normativas locales. En contraste, en El Corpus, municipio con una larga tradición minera, no existe ninguna restricción, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas concesiones y profundiza la fragmentación territorial. En ambos casos, la

persistencia y expansión de la minería metálica intensifican las tensiones entre comunidades, autoridades locales y actores empresariales que operan en la región.

A continuación, se presentan algunos de los conflictos socioambientales identificados en los departamentos de Choluteca y Valle.

Tabla 3. Conflictos socioambientales activos en los departamentos de Choluteca y Valle

Conflicto	Ubicación / departamento / región	Temática del conflicto	Estado	Nivel de actividad
Reclamación de tierras en la zona de Zacate Grande	Choluteca, Valle	Agrario	Activo	Alto
Deforestación de San Lorenzo	Choluteca, Valle	Deforestación de áreas protegidas	Activo	Alto
Proyecto hidroeléctrico Los Prados I y II	Choluteca, Choluteca	Deforestación de energía	Activo	Alto
Deforestación en La Botija	Choluteca, Choluteca	Deforestación	Activo	Medio
El Tulito	Choluteca, Choluteca	Agrario	Activo	Alto
Cedeño	Choluteca, Choluteca	Climático / Vulnerabilidad costera	Activo	Alto
Deforestación de material de construcción en Orocuina y Apacilagua	Choluteca	Deforestación de material metálica	Activo	Medio
El Tular	Choluteca, Valle	Agrario	Activo	Medio
Barrio San José	Choluteca, Valle	Deforestación de energía	Activo	Medio

Amal y Ojo de Agua	unfo, Choluteca	a metálica	Activo	lto
El Corpus	pus, Choluteca	a metálica	Activo	lto
le residuos y desechos sólidos	sigüe, Choluteca	ambiental	Activo	edio
la cuenca del Goascorán	Paz y Valle	anza hídrica	Activo	lto
n de humedales del Golfo de Fonseca	o, Amapala, Alianza, Marcovia, El Triunfo y Duyure	as costeros / l-marítimo	Activo	edio
igación geotérmica	igüe y El Triunfo, Choluteca	on de energía	Activo	edio

elaboración propia con datos sustraídos del *Análisis de Coyuntura Regional, Choluteca, 29 de agosto de 2025*.

e) Propuesta y movilización ciudadana: la defensa del territorio desde abajo

Frente al avance de proyectos extractivos, energéticos y portuarios, y ante la persistente ausencia del Estado en la gestión integral del territorio, las comunidades del sur hondureño han desplegado en los últimos años diversas estrategias de resistencia, defensa y reconfiguración territorial desde la base.

Este proceso se manifiesta, en primer lugar, en la multiplicación de declaratorias municipales que buscan reconocer a los municipios como unidades territoriales con autonomía para limitar el extractivismo y adoptar marcos normativos locales orientados a la protección ambiental. Muchas de estas declaratorias han sido impulsadas por organizaciones territoriales con fuerte protagonismo ciudadano, constituyendo un ejercicio de soberanía local y un mecanismo de presión política frente a la inacción estatal. Sin embargo, la relación con las municipalidades ha sido ambivalente.

En varios casos, las alcaldías, aunque responsables de convocar cabildos abiertos para discutir estas declaratorias, han sido denunciadas por manipular las asambleas comunitarias o por adjudicar permisos de operación a proyectos empresariales sin realizar procesos de consulta libre, previa e informada, contraviniendo los acuerdos locales y debilitando el principio de autonomía municipal.

Esta tensión evidencia los límites de la autonomía municipal cuando los intereses económicos y políticos intervienen en la gestión del territorio, resaltando la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la vigilancia social sobre para garantizar que las decisiones comunitarias sean respetadas y cumplidas efectivamente.

Tabla 4. Declaratorias municipales libres de extractivismo en los departamentos de Choluteca y Valle

Nº	Departamento	Municipio / Sector	Estado de declaratoria
1	Choluteca	Namasigüe	Ratificada
2	Choluteca	El Triunfo	Ratificada
3	Choluteca	Concepción de María	Ratificada
4	Choluteca	San Marcos de Colón	Ratificada
5	Choluteca	Orocuina	Ratificada
6	Choluteca	Apacilagüa	Ratificada
7	Choluteca	Sector de Choluteca (zona norte del municipio cabecera)	Ratificada
8	Valle	Caridad	Ratificada
9	Valle	Nacaome	Ratificada
10	Valle	Langüe	Ratificada
11	Valle	Península de Zacate Grande	Ratificada

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del *Análisis de Coyuntura Regional, Choluteca, 29 de agosto de 2025*.

El avance de las declaratorias municipales libres de extractivismo en el sur de Honduras revela una tendencia creciente hacia la reconfiguración territorial desde abajo.

En Choluteca, aproximadamente el 38% de los municipios, junto con parte del municipio cabecera, han asumido acuerdos formales de rechazo a proyectos extractivos, evidenciando la consolidación de una conciencia ecológica vinculada a la defensa de los bienes comunes.

En Valle, cerca del 33 % de los municipios (y hasta 44 % si se incluye la Península de Zacate Grande) han adoptado posturas similares, reflejando una fuerte apropiación comunitaria del territorio. Estos porcentajes son significativos considerando las intensas presiones extractivas, energéticas y agroindustriales que enfrenta la región.

El papel de los Comités Municipales Ambientales (CMA) y de los Comités de Defensa de la Naturaleza (CDN) ha sido fundamental en este proceso. Estas organizaciones comunitarias han asumido tareas que van desde el monitoreo del ambiente y la denuncia de daños ecológicos, hasta la elaboración de propuestas de ordenanzas municipales y planes de manejo. Además, las Pastorales Ecológicas han incorporado el cuidado de la creación como un eje central de su acción pastoral, vinculando la defensa ambiental con principios éticos y espirituales que fortalecen el arraigo comunitario en la lucha por el territorio.

A nivel local, también han emergido espacios articuladores que buscan trascender lo municipal y proyectar las luchas a nivel departamental. Ejemplo de ello son la Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias Extractivas del Sur (PCAIE-SUR), que aglutina a comunidades impactadas por la minería metálica y no metálica, los proyectos energéticos y la expansión de la agroindustria; y del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), que articula organizaciones comunitarias, campesinas, eclesiales y juveniles en torno a una agenda común de defensa de los bienes comunes.

Estos procesos organizativos no sólo representan una resistencia frente al despojo, sino que también promueven propuestas alternativas de gestión territorial, basadas en la participación ciudadana, la justicia socioambiental y la defensa de la vida. Al reivindicar el municipio como una unidad política desde las bases, estas iniciativas buscan disputar el sentido del desarrollo y redefinir las relaciones entre sociedad, naturaleza y Estado en el sur de Honduras.

e) Desafíos de la administración pública

Los problemas estructurales de gobernanza, como la débil planificación territorial, la baja inversión pública, la fragmentación institucional y la captura de lo público por intereses privados, han generado vacíos en la gestión del desarrollo. Estos vacíos no son neutros, han permitido que las lógicas mercantiles y extractivas sustituyan al Estado, imponiendo una visión del sur como un “espacio vacío”, disponible para la inversión o la devastación, en lugar de reconocerlo como un territorio habitado, diverso y socialmente vivo.

Superar esta visión implica recuperar lo público como bien común. La administración pública debe garantizar derechos, ordenar el territorio de manera participativa y asumir la gestión ambiental como una política de Estado, no como un servicio tercerizado o subordinado a intereses empresariales. Esto implica fortalecer las capacidades locales, profesionalizar las funciones públicas y establecer mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de inversión, concesión y planificación territorial.

La reconstrucción institucional del sur también pasa por cambiar la percepción del territorio: dejar de considerarlo como una periferia pasiva y reconocerlo como un espacio dinámico, donde emergen demandas sociales, innovaciones locales y formas alternativas de gobernanza.

Los comités ambientales, plataformas ciudadanas y movimientos territoriales han demostrado una notable capacidad de organización frente a la ausencia del Estado. Sin embargo, esta energía contrasta con el rol ambiguo de muchas municipalidades, donde las alcaldías, en lugar de ser aliadas en la defensa del territorio, mantienen vínculos estrechos con empresas agroindustriales, energéticas o extractivas.

En varios municipios del sur, la cooptación de gobiernos locales (como en El Corpus), la adjudicación discrecional de permisos ambientales y de operación (como en Apacilagua y Choluteca), y la falta de transparencia en los procesos de consulta y cabildos abiertos (como en Namasigüe), han limitado la participación ciudadana y erosionado la confianza comunitaria.

Profundizar un modelo de desarrollo inclusivo y territorialmente justo exige, por tanto, revisar críticamente la función política de las municipalidades, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y asegurar que las decisiones sobre el territorio respondan al interés público, no a alianzas empresariales de corto plazo.

Pensar el sur de Honduras no debe reducirse a imaginarlo como una plataforma logística o un espacio disponible para los negocios. Reconocer su potencial implica fortalecer su capacidad de regeneración ecológica, autodeterminación y de justicia social.

III. Referencias

- Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes*. Envión Editores / Universidad del Cauca.
- Folchi, M. (2001). *Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: No siempre pobres ni siempre ecologistas*. En *El ecologismo popular al debate*. Universidad de Chile.
- González de Molina, M., Soto, D., & Garrido, F. (2015). *Los conflictos ambientales como conflictos sociales. Una mirada desde la ecología política y la historia*. Revista Ecología Política. Recuperado de <https://www.ecologiapolitica.info/los-conflictos-ambientales-como-conflictos-sociales-una-mirada-desde-la-ecologia-politica-y-la-historia/>
- Gudynas, E. (2011). *Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo*. América Latina en Movimiento (Año XXXV, No. 462). Quito: ALAI.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores.
- Martínez Alier, J. (2005). *El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Icaria.

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2001). *Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. Siglo XXI Editores.
- Quintero, C., González, L. F., & Henao Londoño, A. (2017). *Conflictos socioambientales: Entre la legitimidad normativa y las legitimidades sociales. Caso mina La Colosa, Cajamarca (Tolima, Colombia)*. *Luna Azul*, (44), 165–176. <https://doi.org/10.17151/luaz.2017.44.10>
- Raffestin, C. (1980). *Pour une géographie du pouvoir*. Librairie Droz.
- Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. CALAS / Siglo XXI Editores.
- Banco Central de Honduras (BCH). (2023). *Informe Anual 2023*. Tegucigalpa: BCH.
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). (2022). *Plan Maestro de Inversión y Desarrollo del Golfo de Fonseca*. Tegucigalpa: BCIE.
- Comité Binacional de la Cuenca del Río Goascorán. (2018). *Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Goascorán*. Tegucigalpa.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). *Transporte y comercio terrestre en Centroamérica: Retos y oportunidades*. Santiago de Chile: CEPAL.
- FAO & CEPAL. (2021). *El Corredor Seco Centroamericano: Desafíos para el desarrollo rural sostenible*. Naciones Unidas.
- Instituto de la Propiedad (IP). (2021). *Informe de gestión 2021*. Tegucigalpa: Gobierno de Honduras.
- Instituto de la Propiedad (IP) & Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR). (2022). *Memoria del Centro Asociado del Sur (CAS)*. Tegucigalpa.
- La Prensa. (2019, 14 de mayo). *El Guasaule mueve más de 500 camiones diarios de carga pesada*. San Pedro Sula: Grupo OPSA.
- Oxfam. (2019). *Territorios en riesgo II: Minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras*. Tegucigalpa: Oxfam Honduras. Recuperado de https://cng-cdn.oxfam.org/honduras.oxfam.org/s3fs-public/file_attachmen

[ts/Teritorios%20en%20Riesgo%20il%20-%20Miner%C3%ADa.%20generaci%C3%B3n%20de%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20e%20hidrocarburos%20en%20Honduras.pdf](https://teritorios%20en%20riesgo%20il%20-%20miner%C3%ADa.%20generaci%C3%B3n%20de%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20e%20hidrocarburos%20en%20Honduras.pdf)

- Programa Mundial de Alimentos (PMA). (2020). *Evaluación de la inseguridad alimentaria en el Corredor Seco Centroamericano*. Tegucigalpa: PMA.
- Secretaría de Energía de Honduras (SEN). (2022). *Informe de acceso y cobertura a la electricidad 2022*. Tegucigalpa: SEN.
- Secretaría de la Convención Ramsar. (2021). *Sitio Ramsar No. 1000: Sistema de Humedales de la Zona Sur de Honduras*. Recuperado de <https://rsis.ramsar.org/es/rs/1000>
- Sistema de la Integración Económica Centroamericana (SIECA). (2022). *Estado actual de la integración económica centroamericana 2022*. Ciudad de Guatemala: SIECA.
- Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) / Observatorio de Educación de la UNAH. (2022). *Perfiles sociodemográficos departamentales: Choluteca y Valle*. Tegucigalpa: UNAH-OEE. Recuperado de <https://oee.unah.edu.hn/>
- Google Maps. (2025). *Mapa del Golfo de Fonseca y su conectividad territorial*. [Captura de pantalla, consultado en enero de 2025].
- Secretaría de la Convención Ramsar. (2021). *Mapa de los humedales del Golfo de Fonseca (Sitio Ramsar 1000)*. <https://rsis.ramsar.org/es/rs/1000>

Convenio 169 de la OIT — Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica:

- (a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
- (b) a los pueblos en países independientes que son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

Defensa del Río Gualcarque (pueblo Lenca)

Recuperación de títulos ancestrales en Guajiquiro, Opatoro y Santa Elena (Lenca)

Conflicto forestal y minero en Locomapa, Yoro (Tolupán)

Sentencias incumplidas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (Garífuna)

Desaparición de líderes garífunas de Triunfo de la Cruz (Garífuna)

Invasión de territorios Pech y Tawahka en la Biosfera del Río Plátano

Expansión ganadera y narcotráfico en la Mosquitia (Misquito)

Conflictos mineros en La Unión y Copán Ruinas (Chortí)

Luchas por reconocimiento territorial del pueblo Nahua (sur de Honduras)

[1] La Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) ha denunciado que la creación del Refugio de Vida Silvestre Bahía de San Lorenzo ha funcionado como un mecanismo de concentración y control del territorio, más que como una estrategia de conservación participativa. Según la organización, las acciones de co-manejo fueron delegadas a la Corporación DINAT, la cual ha restringido el acceso de las comunidades mediante guardias armados y ha obstaculizado las iniciativas locales de cuidado y restauración en áreas específicas del refugio.

[2] **Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).** (2022). *Estado actual de la integración 2022* [PDF].

https://estadisticas.sieca.int/documentos/ver/2022126122539454_Estado%20Actual%20de%20la%20Integración%202022.pdf